Señores

**JUZGADO TREINTA Y CINCO (35°) ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ.**

**MEDIO DE CONTROL:** CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.

**RADICADO:** 11001333603520210015200.

**DEMANDANTE:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.

**DEMANDADOS:** MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL FONDO

NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA

**ASUNTO: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE PRIMERA. INSTANCIA.**

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la C.C. No. 19.395.114, obrando en mi calidad de apoderado judicial de la parte actora **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA**, mediante el presente escrito respetuosamente manifiesto que, reasumo el poder a mi conferido y encontrándome dentro del término legal, presento los respectivos **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**, solicitando se profiera **SENTENCIA FAVORABLE** para mi representada, declarando favorablemente la totalidad de las pretensiones de la demanda , con fundamento en los argumentos que concretaré en los acápites siguientes:

1. **OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR ALEGATOS.**

Teniendo en cuenta que el 25 de octubre de 2023 se celebró una audiencia de pruebas y, una vez concluida, al no quedar pruebas pendientes por practicar, se declaró clausurada la etapa probatoria. Se concedió un plazo de 10 días a partir de la audiencia para presentar los alegatos de conclusión, tal y como lo establece el inciso final del artículo 181 del CPACA. El plazo comenzó a contar los días 26, 27,30, 31, de octubre y los dìas 1, 2,3, 7, 8 y 9 de noviembre, por lo tanto, el presente escrito se presenta dentro del plazo establecido para este fin.

1. **DELIMITACIÓN DEL DEBATE Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO.**

En una exhaustiva y meticulosa evaluación de los hechos planteados en la demanda y las contestaciones presentadas por las partes demandadas, el Despacho procedió en la audiencia inicial a delimitar claramente el objeto de controversia y el problema jurídico a resolver en este proceso de la siguiente manera:

*“Establecer si hay a lugar a declarar la nulidad de la Resolución N° 2773 del 20 de diciembre de 2017 “Por medio de la cual se declara un incumplimiento al PROYECTO VIVIENDA SALUDABLE MAPIRIPÁN, en el municipio de Mapiripán – departamento del Meta”, confirmada por la Resolución No. 1326 del 23 de julio de 2018, expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante las cuales se declaró el incumplimiento del Municipio de Mapiripan de las obligaciones adquiridas en calidad de oferente del proyecto “Vivienda Saludable Mapiripán” y se hizo efectiva la garantía constituida a favor del Fondo Nacional de Vivienda mediante póliza No. 82047994000009685, por valor de $40.205.880. De ser así, determinar si hay lugar a ordenar la cesación la suspensión de toda cualquier actuación administrativa, coactiva o judicial derivada de los actos administrativos mencionados, y la devolución del valor que se haya pagado a la fecha de ejecutoria de la sentencia, junto con sus respectivos intereses moratorios o, en subsidio de lo anterior, con la indexación de lo pagado.*

En línea con el objeto del litigio, para el presente asunto fueron presentaron sobrados argumentos y medios de convicción que militan en el cartulario, que permiten concluir, sin lugar a dubitaciones, que los actos administrativos enjuiciados: Resolución No. 2773 del 20 de diciembre de 2017, y la Resolución No. 1326 del 23 de julio de 2018, por medio de la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto por la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa en contra de la Resolución No. 2773 del 20 de diciembre de 2017, proferidos por la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, fueron expedidos de forma irregular, desconociendo derechos fundamentales de raigambre constitucional. Ello implica vicios de falta de motivación y falsa motivación, en detrimento de los derechos fundamentales de mi defendida, razón suficiente para que la H. Juez profiera sentencia de primera instancia acogiendo la totalidad de las pretensiones.

1. **CONCLUSIONES PROBATORIAS FRENTE A LA DEMANDA.**

En primer lugar, quiero reiterar los hechos que han sido acreditados en el presente procedimiento:

1. Se estableció con certeza que las Resoluciones No. 2773 del 20 de diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018 se profirieron desconociendo los derechos de audiencia y defensa de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, por cuanto no se le otorgó la oportunidad de presentar descargos, solicitar y controvertir pruebas, presentar alegatos de conclusión, y en general, se vulneró el derecho fundamental al debido proceso para ejercer la defensa de sus intereses en el presente asunto.
2. Se constató que las Resoluciones No. 2770 del 20 diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018 se profirieron con infracción a una norma superior y de carácter imperativo, así como también a través de una falsa motivación, por cuanto de forma arbitraria, se desconoció e inaplicó el artículo 1081 del Código de Comercio el cual consagra la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. Prescripción que en el caso bajo estudio se encuentra plenamente demostrada porque ocurrió con anterioridad a la expedición de los actos administrativos enjuiciados.
3. Quedó demostrado que las Resoluciones No. 2773 del 20 de diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018 se profirieron desconociendo los derechos de audiencia y defensa de la Aseguradora Solidaria de Colombia, mediante un procedimiento irregular y a través de una falsa motivación, debido a que las entidades Convocadas no motivaron de forma suficiente y clara la decisión que conllevó a la declaratoria de incumplimiento al proyecto *“VIVIENDA SALUDABLE MAPIRIPÁN”*.
4. Se comprobó que las Resoluciones No. 2773 del 20 de diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018 se profirieron con infracción en las normas en que debían fundarse, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, y a través de un procedimiento irregular, toda vez que, en virtud de los actos administrativos demandados, se afectó la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Entidades Estatales No. 820-47-994000009685, sin seguir el procedimiento convencionalmente aplicable al trámite de sanción, consagrado expresamente en las condiciones generales del contrato de seguro.
5. En definitiva, se ha demostrado que mi representada no está legal ni contractualmente obligada a pagar prestación alguna al Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA ni al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio derivada del Contrato de Seguro instrumentado en Póliza de Seguro de Cumplimiento de Entidades Estatales No. 820-47-994000009685, por cuanto los actos administrativos: Resoluciones No. 2773 del 20 de diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018 se expidieron adelantando un procedimiento irregular, sin competencia, con infracción en las normas en que debían fundarse, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa de la Aseguradora Solidaria de Colombia y con falsa motivación y, de conformidad con ello, se determine que mi representada no está obligada a sufragar perjuicio alguno al Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, por concepto de la declaratoria de incumplimiento al proyecto “VIVIENDA SALUDABLE”.
6. **SE ESTABLECIÒ CON CERTEZA LA VULNERACIÒN AL DEBIDO PROCESO EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA: FALTA DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEFENSA DE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA.**

A la vista de lo dicho anteriormente, en el presente asunto debe emitirse fallo de primera instancia declarándose la nulidad de las Resoluciones No. 2773 del 20 de diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018, ello como consecuencia de los actos lesivos del derecho de defensa en comunión con el debido proceso, que fueron desconocidos por las entidades demandadas al proferir sendos Actos Administrativos, sin permitir que la compañía aseguradora rindiera los respectivos descargos, solicitara o controvirtiera las pruebas presentadas por la Administración, tampoco se le permitió presentar alegatos de conclusión, solicitudes de corrección de irregularidades del trámite administrativo, y en general, le privó de toda oportunidad para ejercer adecuadamente su derecho de defensa, debido proceso y contradicción, al haber proferido una resolución de declaratoria de incumplimiento, sin siquiera haber otorgado la oportunidad para escuchar a los sujetos pasivos de dichos actos administrativos.

Lo anterior, por cuanto el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fondo Nacional de Vivienda no le otorgó durante el trámite de sanción – declaratoria de incumplimiento del Proyecto VIVIENDA SALUDABLE MAPIRIPÁN a la Aseguradora la oportunidad para probar una situación que la exonerara de su responsabilidad. En tal sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, consejero ponente Carlos Enrique Moreno Rubio, mediante Sentencia de trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023) que el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa es una causal implícita de nulidad en el derecho administrativo, al formar parte de la garantía constitucional básica del debido proceso:

La Sala, de manera general, **entiende que el derecho de audiencia y de defensa, hace parte del debido proceso y permite que los actos administrativos tengan validez en el escenario jurídico.** En tal sentido, en virtud de esta prerrogativa, las actuaciones administrativas, deben dar efectividad a los (artículos 209 de la Constitución Política y 1 del CPACA) para dotar de certeza y seguridad jurídica las relaciones entre el particular y la administración, puesto que aquel, en ejercicio de los derechos inherentes a la democracia, podrá conocer de la existencia de dichas actividades en orden a poder participar en el proceso del juicio y en la formación del acto administrativo, lo cual lleva a que el Estado no puede deliberada y arbitrariamente limitarlos o cercenarlos.[[1]](#footnote-1)

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que el Consejo de Estado en sus providencias garantiza las actuaciones previas normadas en distintos trámites, y es claro que el desconocimiento de procedimientos propios de cada actuación administrativa genera la nulidad del acto administrativo por la causal del desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. Así entonces, para el presente caso se tiene que, para la declaratoria de incumplimiento por parte del Fondo Nacional de Vivienda, previo a la expedición del acto administrativo que declara el incumplimiento al Proyecto, se debe otorgar a todas las partes la oportunidad para ejercer su defensa de sus intereses.

En un pronunciamiento previo, el Consejo de Estado se refirió a la causal de nulidad relacionada con el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. En la sentencia del 3 de agosto de 2016, con radicación interna 20080, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, emitió la siguiente disposición:

“El derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad, relación que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial. Según dicha norma, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos: i) El derecho al juez natural o funcionario competente.

ii) El derecho a ser juzgado según las formas década juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa. iii) **Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que produzca una decisión motivada, el derecho a impugnarla decisión y la garantía de non bis in ídem.** La expedición irregular de los actos administrativos atañe, precisamente, al derecho a ser juzgado según las formas propias de cada procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación administrativa. No obstante, no toda irregularidad constituye casual de invalidez de los actos administrativos. Para que prospere la causal de nulidad por expedición irregular es necesario que la irregularidad sea grave pues, en principio, en virtud del principio de eficacia, hay irregularidades que pueden sanearse por la propia administración, o entenderse saneadas, si no fueron alegadas. Esto, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. (…) Adicional a todo lo dicho, para que se configure la violación al derecho al debido proceso también es menester que se haya afectado el núcleo esencial de ese derecho, esto es, que se haya afectado el derecho fundamental de defensa”[[2]](#footnote-2)

Descendiendo lo expuesto al caso en concreto, se demostró que el Fondo Nacional de Vivienda con la expedición de las Resoluciones No. 2773 del 20 de diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018, vulneró el debido proceso que trata el artículo 29 de la Constitución Política, en tanto a la Aseguradora Solidaria de Colombia no se le otorgó el derecho a conocer el inicio de la actuación, tampoco fue oída ni se le dio la facultad de ejercer los derechos de defensa y contradicción previo a la declaratoria de incumplimiento del proyecto VIVIENDA SALUDABLE. En efecto, no se le otorgó previo a la declaratoria de incumplimiento, la oportunidad de rendir descargos, presentar pruebas y controvertir las que se encontraban en el expediente, presentar alegatos de conclusión, y solicitudes de corrección de irregularidades del trámite administrativo.

En un caso similar al que aquí nos ocupa, en el cual el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA vulneró el derecho de defensa y contradicción de una Aseguradora, por el que posteriormente fue demandado. El Consejo de Estado declaró la nulidad de actos administrativos por medio de los cuales se ordenó hacer efectivas las garantías de pólizas a favor del Fondo Nacional de Vivienda. Lo anterior, por cuanto no se agotó un procedimiento previo que le permitiera a la Aseguradora presentar sus argumentos de defensa frente a las condiciones que rodearon dicha declaratoria. Al respecto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección C, consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa del 7 de septiembre de 2015, Radicación Interna: 45907, Actor: Seguros del Estado S.A., Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Controversias Contractuales (Apelación Sentencia), indicó lo siguiente:

“…De esta forma, se entiende que si bien en tratándose de contratos de seguro celebrados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista con ocasión de la celebración de un contrato estatal, no le son aplicables las reglas previstas en el artículo 1053 del Código de Comercio, **sí debe garantizarse el derecho al debido proceso dentro del procedimiento de expedición de los actos administrativos por medio de los cuales la administración declara la ocurrencia del siniestro u ordena la efectividad de las garantías constituidas a su favor.**

(..)

Ahora bien, la garantía del derecho fundamental al debido proceso frente a la Compañía aseguradora dentro del procedimiento de expedición de los actos administrativos mediante los cuales la administración declara la ocurrencia del siniestro, **se concreta en que previamente a su declaratoria se le otorgue la oportunidad para que presente sus puntos de vista, allegue los elementos probatorios necesarios y ejerza su derecho de defensa, y es por ésta razón que no es suficiente que la referida decisión se encuentre debidamente motivada y se le haya notificado oportunamente**” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).[[3]](#footnote-3)

En un caso màs reciente el máximo Tribunal de la jurisdicción Contenciosa en sentencia del 8 de octubre de 2020, declaró la vulneración del derecho al debido proceso de Seguros del Estado S.A. por parte de FONVIVIENDA**.** Se encontró que **FONVIVIENDA** no brindó a la aseguradora la oportunidad de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de responsabilidad, ni le permitió tener conocimiento de las pruebas o del expediente administrativo antes de declarar el incumplimiento. Esto se considera contrario al derecho de defensa y contradicción:

[L]os artículos 1077 del Código de Comercio y, 8 y 9 de Resolución 966 de 2004 **establecieron la necesidad de surtir un procedimiento con el propósito de que el asegurado, en este caso FONVIVIENDA, demostrara la ocurrencia del siniestro, la cuantía de la perdida y que, además, le permitiera a la aseguradora, en el sub examine Seguros del Estado, demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de responsabilidad, dado que, el trámite podría finalizar con la decisión de no afectar la garantía.** Precisado lo anterior, la Sala encuentra que en el caso que nos ocupa, **FONVIVIENDA declaró el siniestro e hizo efectiva la garantía, sin que previamente agotara el procedimiento para determinar la ocurrencia del siniestro, la cuantía de la perdida y los hechos o circunstancias excluyentes de responsabilidad; desconociendo así los requisitos contenidos en la Resolución 966 de 2004.** En efecto, en el expediente se encuentra acreditado que, sin el lleno de los requisitos referidos, se expidió la Resolución 410 de 2008, la cual se limitó a hacer referencia a unas visitas, donde presuntamente se determinó el incumplimiento del municipio de Florida, Valle del Cauca, sin adelantar el procedimiento previsto en los artículos 8 y 9 de la Resolución 966 de 2004, para garantizar a la aseguradora la posibilidad de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de responsabilidad. [ ]

**La Sala, atendiendo el acervo probatorio y siguiendo el procedente jurisprudencial transcrito declarará la vulneración del derecho al debido proceso de Seguros del Estado S.A. por parte de FONVIVIENDA, dado que se encontró acreditado que no brindó a la aseguradora la oportunidad de demostrar los hechos o circunstancia excluyentes de responsabilidad, ni le permitió que tuviera conocimiento de las pruebas o del expediente administrativo, antes de declarar el incumplimiento, lo que resulta contrario al derecho de defensa y contradicción.** (Negrillas y subrayas por fuera de texto)**[[4]](#footnote-4)**

En ese orden de cosas, en el presente asunto se ha demostrado sin lugar a dubitación que los actos administrativos las Resoluciones No. 2773 del 20 de diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018, se expidieron con sendos vicios que dan lugar a la invalidación de la voluntad de la administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Con esto hemos cumplido con la carga probatoria de acreditar que los Actos Administrativos revisten de vicios de nulidad que nublan la voluntad de la Administración, razón por la cual la H. Juez debe emitir una sentencia favorable a los intereses de mi prohijada.

1. **SE COMPROBÒ QUE LA EXPEDICIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CON INFRACCIÓN A UNA NORMA SUPERIOR Y DE CARÁCTER IMPERATIVO, ASÍ COMO TAMBIÉN A TRAVÉS DE UNA FALSA MOTIVACIÓN, POR CUANTO DE FORMA ARBITRARIA, SE DESCONOCIÓ E INAPLICÓ EL ARTÍCULO 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO EL CUAL CONSAGRA LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIPCIÓN QUE EN EL CASO BAJO ESTUDIO SE ENCUENTRA PLENAMENTE DEMOSTRADA QUE OCURRIÓ CON ANTERIORIDAD A LA EXPEDICIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ENJUICIADOS.**

En el presente caso, ha quedado demostrado que las Resoluciones No. 2773 del 20 de diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018 fueron expedidas por la entidad demandada con inobservancia de las premisas normativas sobre las cuales debieron fundamentarse. Además, se ha desconocido de manera tajante la aplicación del artículo 1081 del Código de Comercio en lo relativo a la materialización del fenómeno prescriptivo de las acciones derivadas del contrato de seguro.

Lo anterior, se encuentra acreditado en consonancia con las pruebas documentales aportadas por los extremos que componen la litis. La póliza de Seguro de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales No. 820-47-994000009685, expedida por mi defendida, cuyo beneficiario es el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, con una vigencia que comprendía desde el 2009. Límites temporales que correspondían a la duración del proyecto VIVIENDA SALUDABLE MAPIRIPÁN y dentro de las cuales el Municipio de Mapiripán, debía cumplir con sus obligaciones legales.

No obstante, a pesar de que el presunto incumplimiento del oferente ocurrió dentro de la vigencia de la póliza de seguro, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA contaba con dos años a partir de la ocurrencia del siniestro. Es decir, la fecha máxima en la cual se han debido tener cumplidas las obligaciones por parte del oferente (01 enero de 2013), para notificar el acto administrativo que declaraba el incumplimiento del Proyecto Vivienda Saludable Mapiripán. Sin embargo, tal como se evidencia, fue hasta el 02 de febrero del año 2018 (más de cinco años después) que el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA notificó la Resolución No. 2773, mediante la cual declaró el incumplimiento del contrato por parte del Municipio de Mapiripán y, en consecuencia, hizo efectiva la garantía de Póliza de Seguro de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales No. 820-47-9940000009685, decisión que posteriormente fue confirmada a través de la Resolución 1326 del 23 de julio de 2018.

Dicho de otra forma, a partir del presunto incumplimiento del Proyecto Vivienda Saludable Mapiripán por parte del oferente, esto es 01 de enero de 2013, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, contaba con dos (2) años para proferir el acto administrativo que declaraba el siniestro consistente en el incumplimiento del oferente, los cuales se materializaron el 01 de enero de 2015. Lo anterior, de conformidad con el plazo reseñado por la jurisprudencia del Consejo de Estado para expedir el acto administrativo declaratorio de incumplimiento. Sin embargo, tal declaratoria fue notificada de forma extemporánea hasta el año 2018 mediante la Resolución No. 2773, desconociendo las previsiones legales consagradas en el artículo 1081 del Código de Comercio y la línea jurisprudencial del Consejo de Estado.

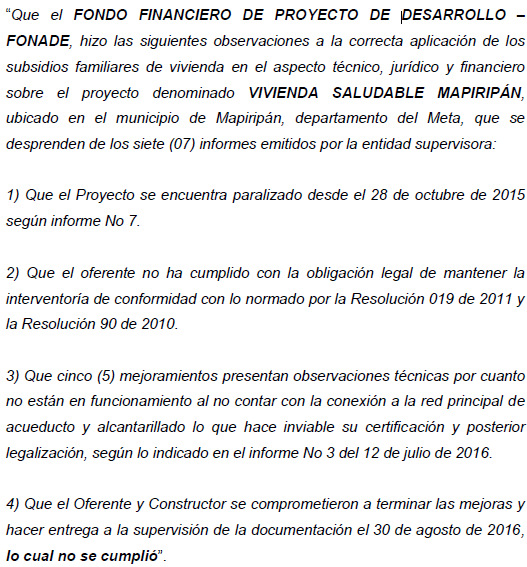
Al anterior escenario se suma el hecho de que los informes presentados por la entidad interventora fueron puestos en conocimiento de FONVIVIENDA desde el 28 de octubre de 2015, informe en el cual se recomendaba a la entidad demandada que, de no cumplirse por parte del oferente con sus obligaciones legales, se iniciaría el procedimiento de incumplimiento en contra del oferente. No obstante, nótese que solo hasta el 20 de diciembre del año 2017 la entidad demandada procede a emitir el acto administrativo objeto del presente embate; es decir, **cuando ya habían transcurrido más de 2 años desde el momento en que la entidad asegurada tuvo conocimiento del presunto incumplimiento por parte del oferente.** Esto implica la realización del fenómeno prescriptivo de las acciones derivadas del contrato de seguro.

Teniendo en cuenta lo anterior, la nulidad de las resoluciones demandadas deviene del hecho de que el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, ha debido tener noticia del presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 2.1.1.1.1.3.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, en virtud del Contrato Interadministrativo celebrado con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, cuyo objeto se circunscribió a “efectuar la supervisión de la aplicación de los subsidios familiares de vivienda (…)”, a más tardar el 01 de enero de 2013. De esta manera, es indefectible que haber proferido la resolución de incumplimiento más de 05 años desde ocurrido el supuesto incumplimiento, acredita una transgresión de las disposiciones del artículo 1081 del C.Co.

En conclusión, es evidente que estamos ante una clara violación de norma superior y falsa motivación, como quiera que se ordenó la efectividad de la póliza, pese a que ya habían transcurrido más de dos años desde el presunto incumplimiento. En otras palabras, en el caso concreto es aplicable la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro, la cual es suficiente para nulitar los actos administrativos demandados, razón por la que el Honorable Despacho no tiene una alternativa distinta que despachar favorablemente las pretensiones de la demanda. Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que el plazo máximo para hacer efectivo el seguro sin superar el lapso consagrado en el artículo 1081 es de 2 años, es totalmente claro que los actos administrativos deben ser anulados, al haber sido expedidos infringiendo una norma de orden público-contenida en el Estatuto Mercantil. En efecto, no se puede hacer efectiva una póliza de seguro cuando sus acciones ya se encuentran prescritas.

1. **QUEDÓ DEMOSTRADO QUE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS FUERON EXPEDIDOS DESCONOCIENDO LOS DERECHOS DE AUDIENCIA, DE AUDIENCIA Y DEFENSA DE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO IRREGULAR Y A TRAVÉS DE UNA FALSA MOTIVACIÓN, DEBIDO A QUE LAS ENTIDADES CONVOCADAS NO MOTIVARON DE FORMA SUFICIENTE Y CLARA LA DECISIÓN QUE CONLLEVÓ A LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROYECTO “VIVIENDA SALUDABLE MAPIRIPÁN”.**

Quedó debidamente acreditado que las Resoluciones No. 2773 del 20 de diciembre de 2017 y1326 del 23 de julio de 2018 incurrieron en las causales de nulidad de desconocimiento del derecho de audiencia y defensa de la Aseguradora Solidaria de Colombia, procedimiento irregular y falsa motivación. En primer lugar, la Resolución No. 2773 del 20 de diciembre de 2017 se encuentra indebida y falsamente motivada de la siguiente manera:



***Documento:*** *a Resolución No. 2773 del 20 de diciembre de 2017*

Pese a lo anterior, se evidencia que el acto administrativo que declaró el incumplimiento no realiza el análisis detallado de cada informe sino que por el contrario se evidencia que simplemente enuncia la existencia de los siete informes, sin realizar un análisis detallado de cada uno para motivar su decisión. Así como tampoco fueron conocidos por parte de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa los informes que aluden las entidades Convocadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es menester señalar que a la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa nunca se le notificó respecto de los informes emitidos por la entidad supervisora, esto es, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE. Ante esta circunstancia, es claro que nos encontramos ante una negación indefinida.

De esa manera y teniendo en cuenta que son desconocidos los motivos para declarar el incumplimiento por parte del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA claramente se observa que nos encontramos ante una indebida motivación, como quiera que hasta la fecha se desconocen las razones que le permitieron a las Convocadas declarar el referido incumplimiento.

Desde el punto de vista del Consejo de Estado, en lo relativo a la indebida motivación de los actos administrativos ha sostenido lo siguiente:

**El artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que las decisiones de la Administración deben ser motivadas y basadas en las pruebas e informes disponibles**. Respecto de los fundamentos constitucionales de la motivación de los actos administrativos, se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T-204 de 14 de marzo de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, **en la cual manifestó que los elementos constitucionales que sostienen el deber de motivar los actos administrativos en síntesis son: la cláusula de Estado de Derecho, el debido proceso, el principio democrático y el principio de publicidad, ( ) También ha dicho la Sala, que la causa o motivo es aquel elemento del acto administrativo que se estructura en razón del conocimiento, consideración y valoración que la Administración realiza de hechos y fundamentos de derecho, que explican su decisión**.[[5]](#footnote-5)

En una decisión más actual, el máximo tribunal sostuvo lo siguiente en torno a la diferencia entre las causales de nulidad por falta y falsa motivación, así:

“La motivación implica, entonces, que la manifestación de la Administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable**; de manera que, los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos, en el sentido de que permitan apreciar con exactitud los motivos determinantes de la decisión. Debe precisarse que la falta y falsa motivación son causales de nulidad diferentes. Se presenta la falta de motivación cuando la Administración prescinde de la motivación que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que: inspiraron la producción de estos, impidiendo al particular ejercer su derecho de defensa y contradicción.[[6]](#footnote-6)**

Ahora bien, la falsa motivación como vicio de ilegalidad del acto administrativo en virtud del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, puede estructurarse cuando en las consideraciones de hecho o de derecho que contiene el acto en cuestión, se incurre en un error de hecho o de derecho, bien sea porque los hechos aducidos al momento de tomar la decisión son inexistentes, o cuando existiendo los hechos, son calificados erradamente desde el punto de vista jurídico. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia, mediante Sentencia del 04 de noviembre de 2015, radicado interno 21151, señaló lo siguiente con respecto a la falsa motivación de los actos administrativos:

“De acuerdo con el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo la falsa motivación es una de las causales de nulidad de los actos de la Administración. Frente a esta causal de nulidad, la Sala ha precisado lo siguiente: **«[…] Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente**. Ahora bien, los hechos que fundamentan la decisión administrativa deben ser reales y la realidad, por supuesto, siempre será una sola. **Por ende, cuando los hechos que tuvo en cuenta la Administración para adoptar la decisión no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se incurre en falsa motivación porque la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la Administración supuso que existía al tomar la decisión. [[7]](#footnote-7)**

Descendiendo lo anterior al caso en concreto, se ha comprobado en el presente asunto que el acto administrativo que declaró el incumplimiento no realiza el análisis detallado de cada informe, sino que, por el contrario, se evidencia que simplemente enuncia la existencia de los siete (7) informes, sin realizar un análisis detallado de cada uno para motivar su decisión. Así como tampoco fueron conocidos por parte de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa los informes que alude la entidad demandada, pues la entidad demandada se limita a enunciarlos y ni siquiera los transcribe en los actos administrativos ahora enjuiciados.

Así mismo, las Resoluciones No. 2773 del 20 de diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018 no realiza ninguna transcripción de los 7 informes que dice tiene en su poder, así como tampoco se evidencian las conclusiones de los informes referidos, ni hace mucho menos una descripción de las obligaciones presuntamente incumplidas por el oferente. Ahora bien, tampoco indica las fechas de los informes del supervisor, esto para tener una aproximación sobre la actualidad del proyecto; generando duda respecto del estado actual de ejecución del Proyecto denominado Vivienda Saludable Mapiripán.

En conclusión, en las Resoluciones No. 2773 del 20 de diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018 expedidas por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – Fondo Nacional de Vivienda se encuentran viciadas de nulidad por una indebida y falsa motivación, pues incurrieron en la falsedad de motivar su acto administrativo en virtud de una supuesta falta de gestión en la legalización de los subsidios de vivienda familiar, que no es cierta. Lo anterior, por cuanto no se ha logrado acreditar por parte del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA la supuesta no legalización de once (11) subsidio de vivienda familiar, según la Resolución No. 2773 del 20 de diciembre de 2017, así como tampoco la falta de gestión en la legalización de estos. Lo anterior, por cuanto el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, incurrió en la falsedad de motivar su acto administrativo en virtud de una supuesta ausencia de gestión que no fue cierta. Adicionalmente, en el caso que nos ocupa, tampoco se evidencia en las Resoluciones cómo se obtuvieron las conclusiones a través de las cuales se declaró el incumplimiento esgrimido por FONVIVIENDA en los actos administrativos proferidos. Es decir, dentro de las referidas Resoluciones no existe motivación acerca del razonamiento lógico que permite comprobar el incumplimiento, razón por la que evidentemente los actos administrativos están viciados de nulidad por un procedimiento irregular (indebida motivación), desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, falsa motivación e indebida motivación. Razones suficientes para que el respetado juzgador declare la nulidad de los actos administrativos acusados.

1. **SE COMPROBÓ QUE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS SE PROFIRIERON CON INFRACCIÓN EN LAS NORMAS EN QUE DEBÍAN FUNDARSE, TODA VEZ QUE, SE AFECTÓ LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES ESTATALES NO. 820-47-994000009685, SIN SEGUIR EL PROCEDIMIENTO CONVENCIONALMENTE APLICABLE AL TRÁMITE DE SANCIÓN, CONSAGRADO EXPRESAMENTE EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO.**

Quedó demostrado que los actos administrativos acusados de nulidad fueron expedidos de manera irregular por la entidad demandada, por cuanto se expidieron con infracción en las normas en que debían fundarse, y a través de una falsa motivación, al inobservar lo estipulado en el artículo 1077 del Código de Comercio, toda vez que el Asegurado (Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA) no demostró ante la Aseguradora Solidaria de Colombia la ocurrencia del siniestro ni la cuantía de la pérdida.

Así las cosas, en virtud de la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Entidades Estatales No. 820-47-994000009685, la falta de legalización de cupos no estaba contemplada como un riesgo amparado. De esa manera, como quiera que no se acreditó la realización de los riesgos que sí estaban asegurados, esto es, la incorrecta inversión de los recursos desembolsados, el uso indebido o la apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo, las Resoluciones No. 2773 del 20 de diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018 se encuentran viciadas de nulidad por falsa motivación y por haber infringido las normas en que debían fundarse.

Es por ello por lo que, de la Resolución No. 2773 del 20 de diciembre de 2017 se evidencia que la declaratoria de incumplimiento al proyecto denominado VIVIENDA SALUDABLE MAPIRIPÁN, se produjo por la no aparente legalización de once (11) subsidios familiares de vivienda. Riesgo que no se encontraba amparado por el numeral del artículo 2º de la Resolución 019 de 2011 ni en la Póliza 820-47-994000009685. El artículo 28 de la Resolución 1604 de 2009 se pronunció respecto de la legalización del subsidio en la modalidad de vivienda saludable, de la siguiente forma:

**“Artículo 28. Legalización del subsidio de mejoramiento para vivienda saludable**. La legalización del subsidio familiar de vivienda de interés social en la modalidad de mejoramiento para vivienda saludable, se acreditará mediante:

1. Formato de recibo a satisfacción de las obras por parte del beneficiario del subsidio, firmado además por el interventor y por el oferente, que concuerde con lo establecido en el contrato suscrito entre el oferente y el beneficiario.

2. Segundo informe de la interventoría al finalizar las obras aprobado por el Fondo Nacional de Vivienda o el supervisor que este designe.

3. Certificación de ejecución de reparación y mejoras locativas expedida por el Fondo Nacional de Vivienda o el supervisor que este designe.”

Es decir que la legalización del subsidio consiste en la acreditación del formato de recibo satisfacción por parte del beneficiario del subsidio, según informe de la interventoría y certificación de ejecución de reparación y mejoras locativas. En consecuencia, la acreditación del subsidio legalizado se encuentra fuera de los riesgos amparados a saber: i) incumplimiento del oferente en la construcción de la solución de vivienda y ii) correcta inversión de los recursos del subsidio familiar de vivienda desembolsados. Por cuanto la motivación y posterior declaración de incumplimiento del Proyecto Vivienda Saludable Mapiripán proferida mediante la Resolución 2773 del 20 de diciembre de 2017 y posteriormente confirmada por medio de la Resolución 1326 del 23 de julio de 2018 se da con ocasión a la supuesta no legalización de un número de subsidios, siendo ello completamente ajeno a los riesgos amparados en este asunto.

En consecuencia, los actos administrativos demandados que declararon el incumplimiento del Proyecto Vivienda Saludable, no tuvieron en cuenta los amparos expresamente contratados en la Póliza 820-47-994000009685. Es decir, el Contrato de Seguro no tiene como uno de sus riesgos amparados la falta de legalización de subsidios. De esta forma, al haber hecho efectiva una Póliza sin que se hubiere realizado el riesgo asegurado, claramente vulnera el precepto señalado en al artículo 1056 del Código de Comercio, lo que por sustracción de manera acredita, que los actos administrativos se expidieron con infracción de las normas en que debían fundarse y a través de falsa motivación.

Por otro lado, también se evidencia que en el presente asunto no es claro como por medio de la Resolución 2773 del 20 de diciembre de 2017 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA liquidó el presunto incumplimiento en un valor de ($40.205.880). Lo anterior, por cuanto no establecen los actos administrativos llegan a ese valor matemáticamente. En consecuencia, al no encontrarse claro dentro del presente asunto cómo se llegó a este valor, es aún más claro que ese rubro no está demostrado. En otras palabras, al no demostrarse la cuantía de la pérdida, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador.

Debido a lo anterior, en el presente caso no existe prueba de la ocurrencia del siniestro ni de la cuantía de la pérdida frente a las dos coberturas contratadas previstas en el numeral 8 del artículo 2º de la Resolución 019 de 2011 a saber: i) incumplimiento del oferente en la construcción de la solución de vivienda y ii) correcta inversión de los recursos del subsidio familiar de vivienda desembolsados. Por cuanto la motivación y posterior declaración de incumplimiento del proyecto denominado VIVIENDA SALUDABLE MAPIRIPÁN, proferida mediante la Resolución 2773 del 20 de diciembre de 2017 y posteriormente confirmada por medio de la Resolución 1323 del 23 de junio de 2018, se da con ocasión de la no legalización de un número de subsidios, siendo ello completamente ajeno a los riesgos amparados en este asunto.

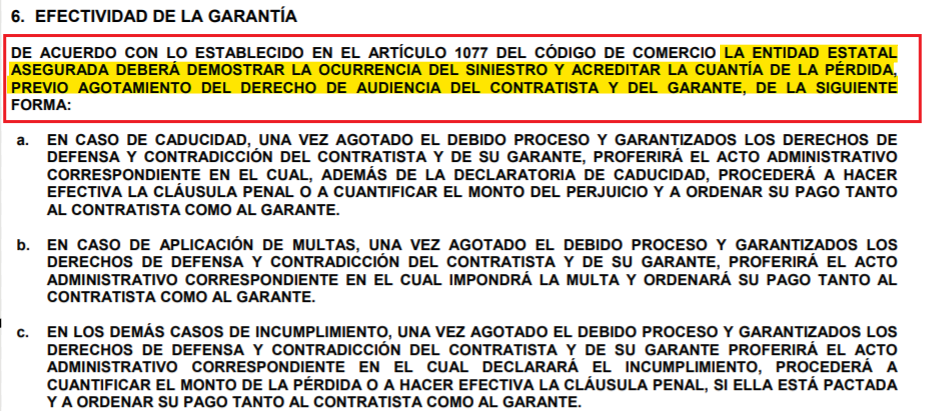
En consecuencia, los actos administrativos demandados que declararon el incumplimiento del proyecto VIVIENDA SALUDABLE MAPIRIPÁN, no tuvieron en cuenta los amparos expresamente contratados en la Póliza 820-47-994000009685. Es decir, el Contrato de Seguro no tiene como uno de sus riesgos amparados la ausencia de legalización de subsidios de vivienda de interés social. De esta forma, al haber hecho efectiva una Póliza sin que se hubiere realizado el riesgo asegurado, claramente vulnera el precepto señalado en al artículo 1056 del Código de Comercio, lo que por sustracción de manera acredita, que los actos administrativos se expidieron con infracción de las normas en que debían fundarse y a través de falsa motivación.

Es decir, la falta de legalización de subsidios familiares de vivienda no estaba contemplada como un riesgo amparado, y como quiera que no se acreditó la realización de los riesgos que sí estaban cobijados, esto es, el incumplimiento del oferente en la construcción de la solución de vivienda y la correcta inversión de los recursos del subsidio familiar de vivienda desembolsados. Es completamente claro que las Resoluciones No. 2773 del 20 de diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018, se encuentran viciadas de nulidad por falsa motivación y desatienden las normas en que debían fundarse, en tanto el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA ordenó la efectividad de la garantía contentiva en la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Entidades Estatales No. 820-47-994000009685, sin tener en cuenta los riesgos amparados en el presente caso. Razones suficientes para que la respetada juez declare la nulidad de los actos administrativos acusados.

1. **SE DEMOSTRÒ QUE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS AFECTARON LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES ESTATALES NO. 820-47-994000009685, SIN SEGUIR EL PROCEDIMIENTO CONVENCIONALMENTE APLICABLE AL TRÁMITE DE SANCIÓN, CONSAGRADO EXPRESAMENTE EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO.**

En el presente caso se demostró a su vez que las Resoluciones No. 2773 del 20 de diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018, se encuentran viciados de nulidad, por cuanto se expidieron mediante un procedimiento irregular al inobservar lo estipulado en el artículo 6º de las Condiciones Generales de la Póliza de Cumplimiento – Garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales. Toda vez que no se demostró ante la Aseguradora Solidaria de Colombia la ocurrencia del siniestro ni la cuantía de la pérdida.

Verificada la Póliza 820-47-994000009685, y sus respectivas Condiciones Generales, y en virtud de la asunción riesgos que trata el artículo 1056 del Código de Comercio, el cual establece*: “Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuesto el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”.* Se evidencia que, en el presente asunto, las partes contractuales que celebraron el contrato de seguro acordaron un procedimiento, con respecto a la efectividad de la garantía.



***Documento:*** *Póliza de Cumplimiento Garantía Única de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales*

En consecuencia, el procedimiento previsto en el contrato de seguro se vulneró por cuanto el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA hizo efectiva la garantía contenida en la Póliza 820-47-994000009685, sin tener en cuenta lo dispuesto en el condicionado general del contrato de seguro. En ese sentido, la declaratoria de incumplimiento no se llevó a cabo mediante un trámite que permitiera ser escuchado, rendir descargos, pedir y controvertir pruebas, presentar alegatos de conclusión, solicitudes de corrección de irregularidades, nulidad del trámite, y en general, se le privó de todo derecho a ejercer su derecho de defensa respetando las garantías al debido proceso, y el acceso a la administración de justicia. Lo anterior, demuestra la clara contravención del condicionado general del contrato de seguro.

En definitiva, las **Resoluciones No. 2773 del 20 de diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018**, se profirieron con infracción en las normas en que debían fundarse, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, y a través de un procedimiento irregular, toda vez que, se afectó la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Entidades Estatales No. 820-47-994000009685, sin seguir el procedimiento convencionalmente aplicable al trámite de sanción, consagrado expresamente en el artículo 6º de las Condiciones Generales de la Póliza de Cumplimiento – Garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales. Razones suficientes para que la respetada juez declare la nulidad de los actos administrativos acusados.

1. **SE DEMOSTRÒ QUE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS SE EXPIDIERON SE DEMOSTRÒ QUE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS AFECTARON LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES ESTATALES NO. 820-47-994000009685, SIN SEGUIR EL PROCEDIMIENTO CONVENCIONALMENTE APLICABLE AL TRÁMITE DE SANCIÓN, CONSAGRADO EXPRESAMENTE EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO.**

Sin perjuicio de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro que fue alegada previamente, mediante la cual se expone que el incumplimiento de las obligaciones a cargo del oferente debió ocurrir a más tardar el 01 de enero de 2013, en el remoto e hipotético evento en el que el juzgado desestime ese concepto de violación y considere que el hecho ocurrió con posterioridad a esa fecha, subsidiariamente, se deberá tener en cuenta que la póliza no presta cobertura temporal, por cuanto el siniestro fue declarado por fuera de la vigencia del contrato de seguro.

En otras palabras, en el supuesto en el cual el Despacho considere que el incumplimiento ocurrió después del 01 de enero de 2013, deberá tener en cuenta que en ese caso la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 820-47-9940000009685 no tendría cobertura temporal y en consecuencia no podría hacerse efectiva.

Ahora bien, analizado el caso en concreto en la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 820-47-9940000009685 funge como tomador o afianzado el Municipio de Mapiripán, mientras que el asegurado y beneficiario es el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA.

La Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 820-47-9940000009685 se contrató con una vigencia del 25 de junio de 2010 hasta el 01 de enero de 2013 y la modalidad de cobertura pactada fue por ocurrencia de conformidad con la Resolución 019 del 25 de octubre de 2011.

En la mencionada póliza quedó consignada con diametral claridad la voluntad de las partes de amparar el riesgo de incumplimiento y la vigencia que debía tener la póliza de seguro. Misma que no solo quedó consignada en la póliza, sino que fue delimitada por la Resolución 019 del 25 de octubre de 2011.

De esta forma, resulta evidente que el riesgo contractualmente amparado por la Aseguradora es aquel incumplimiento que se encuentre dentro de la vigencia de la póliza de seguro.

En otras palabras, sin perjuicio de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro que fue alegada previamente, mediante la cual se expone que el incumplimiento de las obligaciones a cargo del oferente debió ocurrir a más tardar el 01 de enero de 2013, momento en el cual el oferente ha debido cumplir con la totalidad de sus obligaciones. En el remoto e hipotético evento en el que el juzgado desestime ese concepto de violación y considere que el hecho ocurrió con posterioridad a esa fecha, subsidiariamente, se deberá tener en cuenta que la póliza no presta cobertura temporal, por cuanto los incumplimientos señalados por el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA acaecieron con posterioridad al limite temporal contenido en la póliza bajo estudio.

En consecuencia, resulta claro en este hipotético supuesto, que el incumplimiento por parte del Municipio de Mapiripán habría ocurrido por fuera de la vigencia de la Póliza No. 820-47-994000009685 que comprende desde el 25 de junio de 2010 hasta el 01 de enero de 2013, de conformidad con la Resolución 019 de 2009 y la misma Póliza de Seguro que atendió los lineamientos dispuestos en la Resolución.

Ahora bien, sin perjuicio de que la prescripción de la acción del contrato de seguro se encuentra claramente demostrada, tal y como se señaló en precedencia, debe tomarse en consideración que en el acto administrativo que declara el incumplimiento y el que confirma tal decisión, se esgrimen una serie de incumplimientos que presuntamente habrían ocurrido luego del 01 de enero de 2013.

En consecuencia, si el Despacho considera que los incumplimientos ocurrieron en tales fechas señaladas en los actos administrativos, esto es, luego del 01 de enero de 2013, debe tener en cuenta que la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 820-47-9940000009685 no contaría con cobertura temporal, por cuanto su modalidad es de ocurrencia y su delimitación temporal comprende desde el 25 de junio de 2010 hasta el 01 de enero de 2013.

En virtud de lo anterior, se evidencia como el mismo Fondo Nacional de Vivienda en los actos administrativos que declaran el incumplimiento, esto es, las Resoluciones 2773 del 20 de diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018, manifiesta como fechas de incumplimiento las siguientes: 28 de octubre de 2015, 12 de junio de 2016, 30 de agosto de 2016 y 02 de septiembre de 2016. Es decir, todas aquellas fechas se encuentran por fuera del límite temporal establecido en la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 820-47-9940000009685, esto es, desde el 25 de junio de 2010 hasta el 01 de enero de 2013.

En conclusión, los actos administrativos: Resoluciones 2773 del 20 de diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018 se expidieron con infracción en las normas en que debían fundarse, y a través de una falsa motivación, debido a que no se tuvo en cuenta que la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Entidades Estatales No. 820-47-994000009685 no presta cobertura temporal, en virtud del artículo 1056 del Código de Comercio y el artículo 3º de la Resolución 019 de 2011. Lo anterior, por cuanto, mediante los actos administrativos que declaran el incumplimiento se señalan fechas posteriores a la cobertura temporal de la póliza en mención. Es por ello, que sin perjuicio que en el presente caso, se encuentra demostrado que operó la prescripción, en dado caso que el Despacho tome en cuenta las fechas de incumplimiento contenidas en las Resoluciones 2773 del 20 de diciembre de 2017 y 1326 del 23 de julio de 2018, deberá de igual forma tomar en consideración que la póliza no podrá hacerse efectiva, pues tales fechas no se encuentran dentro del límite temporal contenido en ella, esto es, desde el 25 de junio de 2010 hasta el 01 de enero de 2013.

1. **PETICIÒN**

**PRIMERA:** Por todo lo expuesto, solicito respetuosamente al **JUZGADO TREINTA Y CINCO (35) ADMINISTRATIVO DE BOGOTÀ D.C.,** que declare probadas la totalidad de las pretensiones propuestas en el escrito de la demanda, y en consecuencia **DECLARAR LA NULIDAD** de los actos administrativos acusados:

* **Resolución No. 2773 del 20 de diciembre de 2017**, por medio de la cual se declaró el incumplimiento al municipio de Mapiripán, en su calidad de oferente del proyecto denominado “VIVIENDA SALUDABLE MAPIRIPÁN”, ubicado en el municipio de Samacá, departamento de Boyacá, y como consecuencia de lo anterior, se ordenó hacer efectiva la garantía constituida a favor del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, mediante la póliza No. 820-47-994000009685, correspondiente aonce (11) subsidios familiares devivienda no legalizados, liquidados al 110% por valor de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OHENTA PESOS MONEDA LEGAL ($40.205.880,oo) expedida por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA de conformidad con lo normado en los artículos 1077 y 1080 del Código de Comercio, la Resolución 019 de 2011 y el Protocolo de Incumplimiento.
* **Resolución No. 1326 del 23 de julio de 2018**, por medio de la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto por la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa en contra de la Resolución No. 2773 del 20 de diciembre de 2017, confirmando en todas y cada una de sus partes el acto administrativo recurrido.

**SEGUNDA:** En consecuencia, se **DECRETE** el **RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** al que haya lugar incluyendo el pago de toda suma de dinero que se hubiese efectuado por parte de mi representada con ocasión de la expedición de tales actos administrativos provistos de nulidad.

Texto, Carta

Descripción generada automáticamenteCordialmente,

# GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

1. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Magistrado ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio Bogotá, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD SIMPLE Radicación: 11001-03-24-000-2020-00387-00 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, radicación interna 20080 del 03 de agosto de 2016. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección C, consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa del 7 de septiembre de 2015, Radicación Interna: 45907, Actor: Seguros del Estado S.A., Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Controversias Contractuales (Apelación Sentencia)* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 25-000-23-24-000-2010-00098-01* [↑](#footnote-ref-4)
5. *CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Consejero Ponente: MILTON CHAVES GARCÍA 29 de agosto de 2019Radicación número: 25000-23-37-000-2013-01349-02 (23594)* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta Consejero Ponente: Milton Chaves García Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 25000-23-37-000-2018-00230-02 (26731)* [↑](#footnote-ref-6)
7. *El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 04 de noviembre de 2015, radicado interno 21151. C.P: Martha Teresa Briceño de Valencia* [↑](#footnote-ref-7)